



Bogotá, 17 de junio de 2025

Doctora
Ana María Correa Ángel
Juzgado 4 Administrativo de Neiva
E.S.D.

Proceso	Reparación Directa
Radicado	41001333300420240034900
Demandante	Mariano Sánchez Trujillo y otros
Demandados	ANI y otros.

Asunto: Contestación a la Demanda Final

Cordial saludo,

Sócrates Fernando Castillo Caicedo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.030.537.502 de Bogotá y con la tarjeta profesional No. 214.995 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, amablemente, doy contestación a la demanda final que promovió el señor Mariano Sánchez Trujillo, entre otros, en la oportunidad y la forma que señalan los artículos 173 y 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

I. OPORTUNIDAD

Atendiendo lo ordenado en el auto del 23 de mayo de 2025 y lo regulado en los artículos 173 y 175 de la Ley 1437 de 2011, la Agencia Nacional de Infraestructura procede a dar contestación a la demanda final que la parte actora presentó el 31 de marzo de 2025, donde, como se advirtió en la misma, se reformó la demanda inicial.

En ese orden, se aclara que esta contestación se presenta en el término que concede la Ley, como quiera que la Agencia la radica el 17 de junio de 2025, fecha en la que vencería su oportunidad procesal para hacerlo y ejercer todos los derechos que la normatividad le otorga dentro del marco de estos procesos.

II. LA ANI

Se trata de la Agencia Nacional de Infraestructura, que es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial perteneciente al sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según reza el Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011.

Las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura están ubicadas en la calle 26 No. 59 – 51 Edificio T3 Torre B, Gerencia de Defensa Judicial, Bogotá.



III. A LAS PRETENSIONES

Me opongo a la prosperidad de las pretensiones elevadas por la parte demandante contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI-, dado que carecen de fundamento jurídico, fáctico y probatorio, como se explicará en los acápites correspondientes a las excepciones y a la fundamentación fáctica y jurídica de la defensa.

IV. A LOS HECHOS

De manera preliminar, se debe indicar que los hechos fueron redactados de forma anti técnica, dado que no están debidamente determinados, clasificados y numerados, situación que permite establecer que la demanda incumple la exigencia prevista en el numeral 3 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011. No obstante, al margen de lo anterior, se pasa a realizar el pronunciamiento expreso y concreto sobre los hechos de la demanda final, así:

Al 1º. Se admite parcialmente.

De los documentos que reposan en el expediente, se tiene que es cierto que el señor Hayber Rodríguez Hernández, quien era el conductor del camión grúa de placa SPK440 y empleado del Consorcio Constructor Autovía Neiva Girardot, estacionó el camión grúa al costado derecho de la vía e instaló los conos de señalización y prevención alrededor del camión, dentro del sitio y lugar de los hechos, con el objeto de instalar una tapa para una alcantarilla.

En lo demás, la ANI se atiene a lo que resulte probado en el curso del proceso.

Al 2º. Se admite parcialmente.

El 15 de septiembre de 2016, se suscribió el Contrato de Construcción y Mantenimiento, entre Autovía Neiva Girardot S.A.S., como Sociedad concesionaria, y El Consorcio Constructor Autovía Neiva Girardot, como contratista y quien a su vez está conformado por CSS Constructores S.A. (hoy INZIGNIA CONSTRUCTION) y Alca Ingeniería.

En lo demás, la ANI se atiene a lo que resulte probado en el curso del proceso.

Al 3º. No es un hecho de la ANI, por lo que nos atenemos a lo que se pruebe en el proceso.

Al 4º. Se admite parcialmente.

No es cierto que el vehículo se encontraba estacionado sin ningún tipo de señalización vial preventiva y medidas de seguridad, pues se encontraban los conos y señales preventivas puestas debidamente, de conformidad con el manual de tránsito.

Al 5º. No es un hecho, lo que el demandante indica es una hipótesis propia, derivada del objeto de la litis, la cual debe ser demostrada dentro del presente proceso.

Al 6º. Se admite parcialmente.

El señor Jhonatan Sánchez Moreno (Q.E.P.D) perdió la vida a causa del accidente de tránsito. Sin embargo, el daño no es imputable a la ANI. Esto debe probarse durante el presente proceso.

Al 7º. No es un hecho de la ANI, por lo que nos atenemos a lo que se pruebe en el proceso.



Al 8º. No es un hecho de la ANI, por lo que nos atenemos a lo que se pruebe en el proceso.

Al 9º. No es un hecho de la ANI, por lo que nos atenemos a lo que se pruebe en el proceso.

Al 10º. No es un hecho de la ANI, por lo que nos atenemos a lo que se pruebe en el proceso.

Al 11º. No es un hecho de la ANI, por lo que nos atenemos a lo que se pruebe en el proceso.

Al 12º. No es un hecho, es una apreciación subjetiva del demandante.

Al 13º. No es un hecho de la ANI, por lo que nos atenemos a lo que se pruebe en el proceso.

Al 14º. No es un hecho, es un fundamento jurídico.

Al 15º. No es un hecho, es un fundamento jurídico.

Al 16º. Se niega. No existe prueba que atribuya el daño a la ANI, por lo que le corresponde a la contraparte probar la responsabilidad de la ANI.

Al 17º. No es un hecho de la ANI, por lo que nos atenemos a lo que se pruebe en el proceso.

Al 18º. No es un hecho de la ANI, por lo que nos atenemos a lo que se pruebe en el proceso.

Al 19º. No es un hecho, es un fundamento jurídico.

Al 20º. Se niega. Dentro del expediente obra prueba que acredita que sí existía señalización que advertía de las labores que se estaban realizando. En ningún momento se omitió el deber de señalización.

Al 21º. No es un hecho, es un fundamento de derecho.

Al 22º. No es un hecho, es una apreciación subjetiva de la parte demandante. Me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

Al 23º. No es un hecho de la ANI, por lo que nos atenemos a lo que se pruebe en el proceso.

V. LAS EXCEPCIONES

De entrada, se pedirá que se niegue la totalidad de las pretensiones de la demanda frente a la ANI, con fundamento en lo siguiente:

1. **La inexistencia de obligación de indemnizar de la ANI:** El Contrato de Concesión número 017 de 2015 es conocido por la parte actora, es válido y es a ellos oponible.

Las cláusulas de indemnidad son impuestas por el Legislador, por ejemplo, en la exigencia que se hizo en el artículo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012, donde se impuso a las entidades estatales el deber de incluir en sus contratos una cláusula de indemnidad, con la finalidad de garantizar que el contratista la mantenga libre de cualquier reclamación de terceros.



En el Contrato de Concesión 017 de 2015, esta exigencia se incluyó en el literal a) de la cláusula número 14.3, donde se precisó que:

“14.3. Indemnidad

(a) El Concesionario se obliga a mantener indemne a la ANI de cualquier reclamación proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus Contratistas o subcontratistas o dependientes.”

Como se advirtió, estas cláusulas están incluidas en los Contratos de Concesión que se publican en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP-, así como en la página de la Agencia Nacional de Infraestructura, por lo que la información es de conocimiento o de acceso público y registrada en el sistema que ordena la normatividad, como se observa en el link siguiente: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-20-432>.

Por tal motivo, esta exigencia de indemnidad no solo tiene su origen legal, sino también en el hecho de que el Concesionario es el único responsable de las acciones tendientes al cabal cumplimiento del contrato, todo lo cual realiza en su propio y exclusivo nombre y por su cuenta y riesgo, sin que la Entidad tenga control sobre la infraestructura vial que a ellos les fue transferida por virtud de ese contrato.

Además, en el Contrato se dispuso las garantías y los mecanismos de cobertura de esos riesgos, es así como la Concesión Autovía Neiva Girardot SAS cuenta con garantías o pólizas que cubren la responsabilidad extracontractual de la ANI derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Concesionario, sus Contratistas y/o subcontratistas y el seguro de daños contra todo riesgo, como se indica en el Capítulo XII Garantías y Mecanismos de Cobertura de Riesgos del Contrato de Concesión, en las cláusulas 12.1 y siguientes.

Por lo tanto, de conformidad con lo pactado en el citado Contrato de Concesión, la sociedad Autovía Neiva Girardot SAS es quien se obligó a indemnizar a los terceros y mantener indemne a esta Entidad ante cualquier accidente o evento en el que se cause lesiones a un tercero.

En consecuencia, esta cláusula sí es oponible a los terceros que hoy demandan, porque i) la ANI no tuvo el control sobre la vía, habida cuenta que la infraestructura vial la entregó a título de concesión a la sociedad Autovía Neiva Girardot SAS; y, ii) el contrato de concesión contiene una cláusula que exonera de responsabilidad a la ANI en relación con las labores de señalización y mantenimiento de la vía, la que es válida y surte efectos respecto de terceros, toda vez que todo el contrato fue publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP-.

2. La falta de legitimación en la causa por la pasiva de la ANI, en razón a que la ANI no tiene asignada legalmente la función de señalizar y/o mantener la vía concesionada.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 4165 de 2011, mediante el cual se definieron las funciones y obligaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura, se observa que, dentro de las funciones de la Agencia Nacional de Infraestructura, no se encuentra consagrada obligación alguna de realizar obras de construcción y tampoco de señalización, pues lo cierto es que la ANI se encarga de la **administración de los contratos de concesión** mediante los cuales el Concesionario obtiene una remuneración por la materialización de unos proyectos de infraestructura.



En este orden de ideas, es evidente que la ANI no ha podido ocasionar los perjuicios que alega la parte actora por acción u omisión de su parte, por cuanto si bien en la demanda se invoca a la Agencia Nacional de Infraestructura como extremo pasivo del asunto (parte demandada), en la relación fáctica en que se fundamenta la parte demandante, no aparece imputación o hecho concreto endilgable a la Agencia, por lo que se configuraría la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe resaltar que la ANI es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del Sector Descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, la cual, de conformidad con el Decreto No. 4165 de 2011 cuenta con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, es decir, es una Entidad Nacional y por ende, es una persona de derecho público, a su vez el Concesionario, es una persona jurídica de derecho privado que no hace parte de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI -, de allí que, por la razón antes descrita se configure respecto de mi representada la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Expuesta de manera general las funciones de esta Agencia, a continuación, me permito señalar las actividades que desarrolla la persona jurídica Autovía, según certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio, las cuales son la Construcción de Carreteras, entre otras.

Como puede advertirse, las funciones y objeto que desarrolla la Agencia Nacional de Infraestructura, distan de aquellas que lleva a cabo el Concesionario; aunado a lo anterior, debe señalarse que las funciones que desarrolla la ANI están encaminadas a la administración de los contratos de concesión mediante los cuales los Concesionarios obtienen una remuneración por la materialización de unos proyectos de infraestructura, mas no de la administración de las obras en concreto.

- De la naturaleza de los contratos de concesión y la consecuente falta de legitimación para responder de la ANI.

En términos económicos, una concesión es el otorgamiento temporal del derecho de explotación de unos bienes y servicios por parte de una empresa a otra, con el fin de sufragar los costos de una obra o servicio que el concesionario presta al concedente.

De acuerdo con el numeral 4º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos de concesión, son “los que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede constituirse en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contratación que las partes acuerden”.

En términos académicos, el ejemplo clásico de contrato de concesión es una carretera, donde el concedente es la Nación, el Concesionario el encargado de la construcción, operación y mantenimiento de la vía, y el pago que recibe éste es el recaudo de peajes por



un tiempo determinado, al cabo del cual, revierte a la Nación, la obra y los insumos que hubiere podido utilizar.

Esta particularidad tiene connotaciones trascendentales en lo referente a la responsabilidad que puede generarse en desarrollo de este contrato público y en las obligaciones que se generan con su suscripción, ya que la distribución del riesgo, es muy diferente al común de los contratos, en virtud a que, por su naturaleza, la concesión tiene autonomía e independencia en su ejecución y operación.

Así las cosas, en el Contrato de Concesión se estableció la obligación para el Concesionario de constituir una póliza o amparo de responsabilidad civil extracontractual para mantener indemne por cualquier concepto a la Entidad frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daño y/o perjuicio causados a propiedades a la vida o integridad personal de terceros.

En consecuencia, es claro que, en la ejecución de este Contrato de Concesión, la Entidad contratante, ANI, no tenía asignadas las obligaciones de construcción, mantenimiento y/o señalización, aspectos que expresamente están asignados por el contrato al Concesionario, situación que evidencia la falta de legitimación en la causa por parte de esta entidad, para ser llamada a este proceso.

Pues como se expresó en líneas precedentes, en virtud del referido contrato el Estado trasladó al Concesionario la totalidad de la responsabilidad de los daños que se causen a terceros por la ejecución de este y en caso de una eventual condena, esta deberá dirigirse en contra del titular de la obligación que, en el presente caso, como se evidencia, es directamente el Concesionario.

Bajo esa situación, se configura la legitimación en la causa por pasiva de la ANI, pues dentro de las funciones de la Agencia Nacional de Infraestructura no se encuentra la de ejecutar obras públicas y lo cierto es que la Agencia se encarga de la administración de los contratos de concesión, en los cuales el concesionario cobra al Estado por la materialización de unos proyectos de infraestructura que por regla general pueden tener incidencia carretera, férrea, portuaria o aeroportuaria.

Ahora, tampoco la parte demandante no probó que la Agencia Nacional de Infraestructura haya ocasionado los perjuicios que alega, por cuanto si bien en la demanda se convoca a la Agencia Nacional de Infraestructura, lo cierto es que, al momento de relatar los hechos, no es posible evidenciar acción u omisión atribuible a ésta Entidad, por lo que se configuraría la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Además de lo anterior, es claro que la Agencia Nacional de Infraestructura no ha ocasionado los perjuicios que alega la parte actora por acción u omisión de su parte, por cuanto la encargada de realizar las obras de construcción y rehabilitación, la operación y el mantenimiento de esta, es la Concesión, y tal labor, de acuerdo con el Contrato de Concesión, se realiza por cuenta y riesgo del concesionario, y como se expresó líneas anteriores, la Entidad que represento se encarga únicamente de la administración de los contratos de concesión mediante los cuales el Concesionario obtiene una remuneración por la materialización de unos proyectos de infraestructura, con lo cual respecto de esta entidad se configura la excepción de mérito de falta de legitimación en la causa por pasiva.

En los contratos de concesión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el objeto consiste en otorgar a una persona llamada concesionario la prestación,



operación explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio **por cuenta y riesgo del concesionario** y bajo la vigilancia y control de la Entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden.

Así lo establece el Contrato de Concesión, cuyo objeto es el otorgamiento al concesionario de una concesión **para que realice, por su cuenta y riesgo**, los estudios y diseños definitivos; las obras de construcción y rehabilitación, la operación y el mantenimiento, la prestación de servicios y el uso de los bienes de propiedad del concedente dado en concesión, para la cabal ejecución del proyecto vial, bajo el control y vigilancia del concedente.

De lo anterior, es claro que cualquier daño derivado de la construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de la vía concesionada será responsabilidad del Concesionario, pues es quien desarrolla el objeto del contrato por su cuenta y riesgo y, en consecuencia, existe falta de legitimación en la causa por pasiva.

Aunado a lo anterior, deberá tenerse en cuenta que el hecho dañoso que se le está atribuyendo a mi representada por el accidente de tránsito debería ser catalogado como un hecho no atribuible a la Agencia Nacional de Infraestructura, toda vez que mi representada no tuvo relación alguna para la producción misma del daño, al no tener injerencia en la producción del daño por el cual se demandó.

Es importante tener en cuenta que las labores que desarrolla la Agencia frente a cada corredor vial se determinan específicamente con las funciones asignadas normativamente, así como lo establecido en el contrato de Concesión, que constituye ley para las partes y genera obligaciones exclusivas a cargo del particular.

Por tal motivo, se logra advertir que la ANI no está legitimada en la causa para comparecer al proceso.

3. **La parte demandante incumplió el deber de probar las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama:** No se acreditó la cadena histórica de sucesos que desembocaron en la muerte del señor Jhonatan Sánchez Moreno.

Para empezar, se debe indicar que el artículo 167 del Código General del Proceso dispone que:

“Art. 167.- Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

(...)

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.”
(Negrillas mías)

Así, se tiene que, salvo que se trate de un hecho notorio, a la parte le incumbe probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persigue.

De modo que el actor debe probar ante el Juez los hechos en virtud de los cuales alega el derecho, así como las obligaciones que atribuye a la Agencia Nacional de Infraestructura, y

que a su vez constituyen un derecho a favor de aquél, en atención de la máxima jurídica *ius ex facto oritur*, el derecho alegado debe nacer de los hechos.

En este caso, la parte actora aportó al proceso el informe policial del accidente de tránsito y unos recortes periodísticos, con la finalidad de acreditar la causa del accidente de tránsito. Documentos que no tienen la capacidad probatoria para que se tenga por cierto lo allí consignado, pues requieren cumplir con exigencias y respaldo de otras pruebas para tener el valor probatorio esperado.

De este modo, con esos elementos probatorios, el libelista acreditaría ante el Despacho Judicial, únicamente, que, el 30 de septiembre de 2022, el señor Sánchez Moreno tuvo un accidente de tránsito en el que chocó contra un vehículo de propiedad de un subcontratista del Concesionario.

Sin embargo, las reglas de la vida, el sentido común y la lógica de lo razonable nos lleva a pensar en varias circunstancias que podrían causar la producción del resultado -accidente de tránsito- en el caso del señor Sánchez, situación que hace más exigible la presencia de prueba suficiente que sustente los hechos expuestos en el libelo introductorio, puesto que, se insiste, una colisión en la vía es provocada por varios factores, incluido a los atribuibles a los usuarios viales.

Por consiguiente, se hace visible que la parte demandante no acreditó la cadena histórica de sucesos que desembocaron en la muerte del señor Sánchez, razón por la que no hay certeza sobre cómo ocurrió el daño, pues cabe advertir que esa situación es necesaria para establecer la causa del mismo.

En conclusión, al plenario no se aportaron las pruebas pertinentes, conducentes y útiles que permitan inferir que los hechos narrados por la parte demandante sean ciertos y, a su vez, la consecuencia de una acción u omisión de la Agencia Nacional de Infraestructura, puesto que no se acreditó la cadena histórica de sucesos que desembocaron en los daños alegados.

Por lo anterior, salvo mejor opinión, el Despacho Judicial deberá declarar probada esta excepción, negando las pretensiones de la demanda.

4. Falta de demostración de una falla del servicio.

La Constitución Política consagra la Cláusula General de responsabilidad del Estado en los siguientes términos:

“Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

En desarrollo de este precepto constitucional, la jurisprudencia ha sido consistente en requerir la prueba de tres elementos para imputar responsabilidad al Estado: El hecho dañoso, el daño y el nexa causal entre el primero y el segundo.

Siguiendo el soporte fáctico de la demanda y las imputaciones concretas dirigidas en contra de los demandados, conviene analizar la presente acción bajo el título de imputación general de la falla del servicio relativa.

La falla del servicio como título jurídico de imputación general de responsabilidad, es entendido como el incumplimiento de un deber jurídico a cargo del Estado. La teoría la define como la conducta positiva o negativa consistente en la falta de prestación o prestación ineficiente, irregular o tardía de un servicio público materializada en situaciones fácticas que suponen a la vez la afectación negativa de un interés jurídico protegido.

La responsabilidad estatal se sujeta en concreto a la demostración de la falla en el servicio de la administración, adicionado a la demostración del perjuicio y la relación de causalidad entre éste y aquella.

En otros términos, debe probarse en primer nivel que el servicio funcionó mal, no funcionó o fue inoportuno y que por una de estas circunstancias se produjo el daño, de ahí que no pueda alegarse cualquier falta u omisión sino aquella que haya sido determinante para la producción del perjuicio.

En esta medida, corresponde a la parte actora determinar y probar la falla administrativa alegada, comprobando una omisión o un actuar negligente de esta Entidad; así lo ha indicado el Consejo de Estado en providencia del 28 de abril de 2005, C.P. María Elena Giraldo, Rad. No. 15445:

“El tema de la prueba de la conducta bajo el título jurídico de falla del servicio se enfoca en la acreditación de la existencia de un deber para la Administración en las circunstancias concretas debatidas y en la desatención de ese deber, con motivo de una conducta de acción o de omisión del demandado”.

Conforme lo anterior, y verificado el material probatorio allegado con la demanda final se tiene que la parte actora no demuestra la falla endilgada a la Entidad pública que represento, por cuanto:

- ✓ **No se hace una imputación específica y concreta en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura.**

Puede evidenciarse en el libelo demandatorio final, que no es claro a cuál de las partes demandadas se le imputa el señalamiento de la fuente del daño que se alega, ni por qué hecho.

En esta medida, no es consistente la formulación de imputación de responsabilidad a la Concesionaria y a la ANI, pues no ubica el nexo en ninguno de los demandados específicamente, lo que conlleva a que sea incongruente la demanda, ya que no se demuestra a cuál de todas las formulaciones de responsabilidad responde su reclamo indemnizatorio.

Adicionalmente, la parte actora no logra comprobar la falta de actuación de esta Entidad, que, según el contenido del Contrato de Concesión, no cuenta con la obligación de efectuar el mantenimiento de la vía, pues esta es responsabilidad exclusiva del contratista.

Es claro que la Concesionaria es una persona jurídica de derecho privado que se limita a las obligaciones del Contrato de Concesión, razón por la que se hace necesario anotar que la Concesionaria se obligó a la prestación de los servicios del proyecto vial Neiva Espinal Girardot y a todas aquellas actividades necesarias para el adecuado funcionamiento de la obra y la prestación del servicio público, lo cual incluye, entre otras actividades, realizar el mantenimiento de la infraestructura vial.



No obstante, de llegar a considerar el juzgado que la responsabilidad puede imputarse al Ente estatal, es claro que tampoco se demuestra el nexo causal, puesto que las pruebas que la misma parte demandante aporta al proceso, no evidencian que el supuesto daño haya sido como consecuencia de una acción y/o omisión de esta Agencia.

Igualmente, se quiere resaltar que no se demuestra en el plenario que una posible omisión en los deberes de vigilancia de la ANI, sea la causa eficiente y directa de la supuesta falta de señalización de los vehículos en la vía, pues este aspecto no estructura el nexo causal, ni si quiera sumariamente.

En este sentido, no existe prueba alguna que acredite los supuestos de hecho invocados con la demanda de los que se pueda derivar responsabilidad para mi representada, por cuanto no existe prueba alguna que del comportamiento activo o pasivo de la Agencia Nacional de Infraestructura se hubieran causado los perjuicios alegados por la parte demandante.

Por lo anterior, se solicita negar las pretensiones de la demanda formuladas en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura.

- ✓ **Inexistencia de falla en el servicio por la supuesta falta al deber de control del tránsito y/o patrullaje de la vía:** A la Ani y a la Concesionaria no le era exigible el control del tránsito en el corredor vial.

El artículo 8º de la ley 105 de 1993 prevé que el control de tránsito le corresponde a la Policía de Tránsito, ya que es la que debe velar por el cumplimiento del régimen normativo del tránsito y transporte, así como por la seguridad de las personas y cosas en las vías públicas.

Esta función de la Policía de Tránsito es de carácter preventivo, de asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías y de carácter sancionatorio para quienes infrinjan las normas. Así lo indica la referida norma:

“Artículo 8o. Control de tránsito. Corresponde a la Policía de Tránsito velar por el cumplimiento del régimen normativo del tránsito y transporte, por la seguridad de las personas y cosas en las vías públicas.

Las funciones de la Policía de Tránsito serán de carácter preventivo, de asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías y de carácter sancionatorio para quienes infrinjan las normas.

Las funciones de la Policía de Tránsito serán ejercidas por los cuerpos especializados de tránsito. Los departamentos y los municipios, de más de cincuenta mil habitantes, con población urbana con más del 80%, conforme al censo aprobado, podrán organizar su policía de tránsito, siempre que lo requieran, para el normal tránsito de sus vehículos. A la expedición de la presente Ley se mantendrán y continuarán ejerciendo sus funciones, los cuerpos de guardas bachilleres existentes.

En un plazo de un (1) año y en coordinación con los cuerpos especializados de tránsito, la Policía Nacional también cumplirá funciones de policía de tránsito en todo el territorio nacional, previo adiestramiento en este campo.

El Gobierno Nacional, en un término no superior a ciento ochenta (180) días calendario contados a partir de la vigencia de la presente Ley, reglamentará la creación de escuelas de formación de policías de tránsito, que tendrán como finalidad la instrucción y capacitación de los aspirantes, en áreas específicas de Ingeniería de



Transporte, primeros auxilios médicos, mecánica automotriz, relaciones humanas y policía judicial. Fijará así mismo, los requisitos de conocimientos, experiencia y antigüedad, necesarios para obtener el título policía de tránsito.”

Conforme con lo anterior, se tiene que a la ANI y a la Concesionaria no le era exigible el control de tránsito en el punto vial, ni la vigilancia o patrullaje de la vía, como quiera que, por virtud de la ley, la Policía de Tránsito es la encargada de velar por el cumplimiento del régimen normativo del tránsito y transporte, por la seguridad de las personas y cosas en las vías públicas.

Es así que al no existir esa obligación en cabeza de la ANI y de la Concesionaria tampoco podría realizarse un juicio de responsabilidad frente a las mismas por el incumplimiento o cumplimiento indebido de dicha obligación o función, ya que no eran las encargadas de realizarlas.

En consecuencia, al no existir esa obligación en cabeza de la ANI y de la Concesionaria, tampoco podría realizarse un juicio de responsabilidad frente a las mismas por el incumplimiento o cumplimiento indebido de dicha obligación o función, ya que no eran las encargadas de realizarlas.

5. Inexistencia de nexo causal respecto del presunto daño causado y la ANI.

Tratándose de responsabilidad estatal, es fundamental acreditar el nexo causal entre el daño alegado y la actuación y/o omisión de la entidad estatal llamada a juicio.

El problema en la relación de causalidad, surge a partir de la premisa lógica de que no está llamado a resarcir un daño aquel que no ha contribuido a su realización, de manera que siempre debe existir un ligamen entre el daño causado y el hecho que se atribuye a quien debe responder, en este caso, a la Agencia Nacional de infraestructura. Esa relación necesaria se ha denominado nexo causal y se ubica como un elemento imprescindible que debe ser acreditado en todos los casos para efectos de estructurar la responsabilidad, bien sea objetiva o subjetiva.

De la anterior se evidencia la necesidad de establecer un nexo causal entre el daño alegado y el llamado a juicio para atender tal reparación, vínculo que no se configura respecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, pues no se logra demostrar la forma en la cual una actuación y/o omisión de la Agencia influyó directamente en la causación del daño.

Se reitera que en el presente caso no se demuestra el nexo causal, puesto que las pruebas que la misma parte demandante aporta al proceso, no evidencian que el accidente de tránsito haya sido como consecuencia de una acción y/o omisión de esta Agencia.

El acervo probatorio no es concluyente en indicar que el accidente de tránsito sea consecuencia directa o indirecta de las acciones y/o omisiones de la Agencia Nacional de Infraestructura, toda vez que ninguna de las pruebas da cuenta que ésta hipotética situación sea la causa eficiente y única del daño demandado.

Por lo que se debe concluir que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar.

6. La aplicación del artículo 83 y 29 de la Constitución Política al caso concreto. La ANI ha actuado de buena fe y conforme al debido proceso en la ejecución del objeto del Contrato de Concesión.

El artículo 83 de la Constitución Política establece que “[l]as actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.” En este orden de ideas, se debe precisar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una *“persona correcta (vir bonus)”*. Por lo tanto, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la *“confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada”*.

En este sentido, dicha Corte ha señalado que la buena fe es un principio que *“de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume, y dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente”*. Concretamente, ha precisado, que conforme con este (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas.

En el caso concreto, según lo establecido en el Contrato de Concesión y los demás insumos que lo componen, la Concesionaria asumió la obligación de realizar la obra garantizando el cumplimiento de la normatividad y la técnica del caso, pues es esta la profesional e idónea en la realización de las obras a su cargo.

De ahí que la Agencia Nacional de Infraestructura con base en el principio de buena fe y del debido proceso, siempre esperará que la Concesionaria ajuste su comportamiento a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una *“persona correcta (vir bonus)”*, dada la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, que le exige el cumplimiento de todas las normas legales y convencionales establecidas para la adecuada ejecución del objeto del Contrato de Concesión, puesto que la misma es quien tiene la experiencia en esos temas.

Pensar de otra forma, obligaría a la Agencia a iniciar, por ejemplo, procesos sancionatorios por el incumplimiento de condiciones contractuales que aún no se habrían materializado, presumiendo de la Concesionaria o los subcontratistas de la misma la mala fe, situación que a todas luces se aleja de la normatividad.

Por lo tanto, se tiene que la contraparte olvidó cuál es el debido proceder que se deberá exigir al Estado en tratándose de situaciones contractuales como las que se dan en este caso, donde se suscribió un Contrato de Concesión, pues no está conforme a la buena fe y el debido proceso querer exigir a la ANI un comportamiento que la misma normatividad le limita a sus funciones, y que, además, sería desproporcionado a la luz de la aplicación del principio de la buena fe contractual.

En consecuencia, se deberá negar las pretensiones de la demanda frente a la ANI, puesto que no hubo un incumplimiento normativo atribuible a la misma.



VI. PETICIONES

De acuerdo a la narración de los anteriores hechos, comedidamente solicito al señor Juez, que previo el trámite legal correspondiente al proceso referenciado, efectuó las siguientes o similares declaraciones:

1. Declarar probadas las excepciones propuestas.
2. Denegar las pretensiones de la demanda.
3. Condenar a la parte demandante en costas.

VII. PRUEBAS

1.- Interrogatorio de parte:

Se solicita el decreto de interrogatorio de las personas que tienen la calidad de parte demandante en el proceso de la referencia, con la finalidad de sustentar y acreditar las excepciones propuestas en la contestación de la demanda final o reformada y debatir los hechos de la misma.

2.- Testimonial:

Solicito de manera respetuosa al Despacho se sirva decretar los siguientes testimonios:

2.1. El señor HAYBER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, identificado con la C.C. No. 83.090.046 de Campoalegre (Huila), conductor del vehículo por medio del cual el señor JHONATHAN SANCHEZ MORENO (q.e.p.d.) colisionó en el accidente de tránsito de fecha 30 de septiembre de 2022. Pues al encontrarse en el lugar y momento de los hechos, el señor RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ es un testigo fundamental para la parte demandada, pues su testimonio directo es vital para esclarecer ante el Despacho la situación acaecida toda vez que puede dar cuenta de las señalizaciones y condiciones de la vía en el momento del accidente, las condiciones en las que se encontraba manejando el señor JHONATHAN SANCHEZ MORENO, el estado los vehículos, entre otros detalles, siendo esta una prueba pertinente, conducente y necesaria. Para sus efectos, los datos de notificación del señor HAYBER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ son: Dirección: Autopista Norte Km 21 Interior Olímpica en Chía Cundinamarca Teléfono: 8844359 Ext 102 Correo electrónico: correspondencia@autovia.com.co.

2.2. El señor ANTONIO JIMENEZ identificado con C.C. No. 80.765.115, ayudante del conductor del vehículo por medio del cual el señor JHONATHAN SANCHEZ MORENO (q.e.p.d.) colisionó en el accidente de tránsito de fecha 30 de septiembre de 2022. Pues al encontrarse en el lugar y momento de los hechos, el señor JIMENEZ es un testigo directo fundamental para la parte accionada, pues puede esclarecer ante el Despacho la situación acaecida toda vez que puede dar cuenta de las señalizaciones y condiciones de la vía en el momento del accidente, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, entre otros detalles, siendo esta una prueba pertinente, conducente y necesaria. Para sus efectos, los datos de notificación del señor ANTONIO JIMÉNEZ son: Dirección: Calle 11 #10 – 03 en Aipe – Huila. Teléfono: 3107882344 Correo electrónico: jimenezantonio41870@gmail.com

3.- Documentales:

Se solicita el decreto y la incorporación de la copia del Contrato de Concesión y demás documentos que ya obran en el plenario que fueron aportados por la Concesionaria.



VIII. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría del Despacho, y en las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura, ubicadas en la calle 26 No. 59 – 51 Edificio T3 Torre B, Gerencia de Defensa Judicial, Bogotá.

Además de las modalidades de notificación previstas en la normativa, solicito amablemente que todas las providencias que profiera ese Despacho en el trámite de este proceso, se remitan al buzón de correo electrónico buzonjudicial@ani.gov.co y scastillo@ani.gov.co.

Cordialmente,

Sócrates Fernando Castillo Caicedo

C.C. 1.030.537.502 de Bogotá

T.P. 214.995 del C.S. de la J.



Bogotá, 17 de junio de 2025

Doctora
Ana María Correa Ángel
Juzgado 4 Administrativo de Neiva
E.S.D.

Proceso	Reparación Directa
Radicado	41001333300420240034900
Demandante	Mariano Sánchez Trujillo y otros
Demandados	ANI y otros.

Asunto: Llamamiento en garantía

Honorable Señor Juez:

Actuando como apoderado especial de la Agencia Nacional de Infraestructura, respetuosamente comparezco ante su Despacho con el fin de formular llamamiento en garantía a la sociedad HDI Seguros SA, identificada con NIT 860.004.875-6, para efectos de que se decida en el mismo proceso acerca de las relaciones que existan o puedan llegar a existir entre la ANI y la aseguradora, como resultado del proceso de la referencia, conforme a lo establecido por al artículo 64 y concordantes del Código General del proceso y los hechos y fundamentos que se exponen a continuación:

PARTES EN LA RELACIÓN DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA:

Llamante en garantía- parte asegurada: Agencia Nacional de Infraestructura-ANI- antes Instituto Nacional de Concesiones –INCO-, Agencia Nacional estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según Decreto 4165 del 03 de noviembre de 2011, entidad demanda en el proceso de la referencia.

Llamado en garantía: Sociedad HDI Seguros SA, identificada con NIT 860.004.875-6, sociedad comercial anónima, según Certificado de Existencia y Representación que obra en el expediente.

HECHOS

- 1.- La ANI y la sociedad HDI Seguros SA suscribieron contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual que estuvo vigente desde el año 2020 hasta el año 2022, con el objeto de amparar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que cause la ANI, en los términos de dicho contrato.
- 2.- Con base en la anterior cobertura, de llegar a declararse la responsabilidad de la Entidad que represento en el presente asunto, la aseguradora deberá cubrir la condena impuesta a la ANI.



DEL ALCANCE Y EXTENSIÓN DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

En la eventualidad de que el Honorable Señor Juez decidiera endilgar responsabilidad alguna a la ANI en el reconocimiento y pago de los valores pretendidos por la accionante, solicito se condene a la sociedad HDI Seguros SA, al reintegro de todo lo que la ANI tuviera que pagar en virtud de la condena. Asimismo, sus correspondientes ajustes, costas y gastos del proceso.

En consecuencia, en el evento de acceder a las pretensiones de la demanda en relación con los hechos que dieron lugar al medio de control de la referencia, me permito solicitar al Señor(a) Juez disponga la regulación de las prestaciones a cargo de la entidad llamada en garantía y a favor de la ANI.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como fundamentos jurídicos aplicables, lo establecido por el artículo 64 y concordantes del Código General del proceso y los hechos que se expusieron en precedencia.

PRUEBAS

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 64 y concordantes del Código General del Proceso, me permito acompañar los siguientes documentos:

- Póliza No. No. 4001011 expedida por la sociedad HDI Seguros SA, cuyo beneficiario es la Agencia Nacional de Infraestructura.

Como en la demanda no se determina la fecha de estructuración del daño, se informa que por contrato de seguro entre estas partes se ampara a la ANI, independiente del número de la póliza.

NOTIFICACIONES

El llamado en garantía, la sociedad HDI Seguros SA, en la dirección electrónica: presidencia@hdi.com.co.

Cordialmente,

Sócrates Fernando Castillo Caicedo
C.C. 1.030.537.502 de Bogotá
T.P. 214.995 del C.S. de la J.



Bogotá, 17 de junio de 2025

Doctora
Ana María Correa Ángel
Juzgado 4 Administrativo de Neiva
E.S.D.

Proceso	Reparación Directa
Radicado	41001333300420240034900
Demandante	Mariano Sánchez Trujillo y otros
Demandados	ANI y otros.

Asunto: Llamamiento en Garantía a la Concesionaria Autovia Neiva Girardot SAS

Honorable Señora Juez:

En mi condición de apoderado de la Agencia Nacional de Infraestructura, respetuosamente comparezco ante su Despacho con el fin de formular llamamiento en garantía a la concesión Autovia Neiva Girardot SAS, para efectos de que se decida en el mismo proceso acerca de las relaciones que existan o puedan llegar a existir entre la Agencia y la Concesionaria como resultado del proceso de la referencia, conforme a lo establecido por los artículos 64 y concordantes del Código General del Proceso y los hechos y fundamentos que se exponen a continuación:

PARTES EN LA RELACIÓN DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA:

LLAMANTE EN GARANTÍA: LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- antes INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES –INCO-, Agencia Nacional estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según Decreto 4165 del 03 de noviembre de 2011, entidad demanda en el proceso de la referencia.

LLAMADO EN GARANTÍA: LA CONCESIÓN AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S. recibirá las notificaciones en la Autopista Norte, Kilometro 21, Interior Olímpica – Chía Cundinamarca o a los siguientes correos electrónicos: correspondencia@autovia.com.co; laura.ramirez@autovia.com.co.

HECHOS

1. La Agencia Nacional de Infraestructura celebró con la sociedad Autovía Neiva Girardot S.A.S. el contrato de concesión N°. 017 de 2015, cuyo objeto se lee en el contenido del mismo.

2. En la Cláusula 14.3 y 14.5 de ese Contrato se estableció que el concesionario se obliga a mantener indemne a la ANI de cualquier reclamación proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus contratistas, subcontratistas o dependientes.

3. Es así, como en virtud del referido contrato, el Estado trasladó al Concesionario la totalidad de la responsabilidad de los daños que se causen a terceros por la Concesionaria

Agencia Nacional de Infraestructura

Dirección: Calle 24A # 59 - 42, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 484 88 60

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 410151



por la ejecución de este y en caso de una eventual condena, esta deberá dirigirse en contra del titular de la obligación que, en el presente caso, como se evidencia, es directamente la sociedad Concesionario Autovía Neiva Girardot S.A.S.

Alcance y extensión del Llamamiento En Garantía

En la eventualidad de que el Honorable Juzgado decidiera endilgar responsabilidad alguna a la Agencia Nacional de Infraestructura en el reconocimiento y pago de los valores pretendidos por el accionante, solicito se condene a la Concesionaria al reintegro de todo lo que la Agencia tuviera que pagar en virtud de la condena, asimismo, a sus correspondientes ajustes, costas y gastos del proceso.

En consecuencia, en el evento de acceder a las pretensiones de la demanda en relación con los hechos que dieron lugar a la demanda de la referencia, me permito solicitar al Juez disponga la regulación de las prestaciones a cargo de la entidad llamada en garantía y a favor de la Agencia.

Fundamento de Derecho

Invoco como fundamentos jurídicos aplicables, la regulación frente al llamamiento en garantía artículos 225 y concordantes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011-, al igual que la Jurisprudencia del Consejo de Estado en el que de manera reiterativa se ha pronunciado sobre la figura.

Aquel artículo expresa:

ARTÍCULO 225. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. *Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.*

El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado.

El escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos:

- 1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.*
- 2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.*
- 3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.*
- 4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.*

Así mismo el Consejo de Estado en sentencia del 3 de Marzo de 2010, MP.: Ruth Stella Correa Palacio, puntualizó:



El llamamiento en garantía es una figura procesal que se fundamenta en la existencia de un derecho legal o contractual, que vincula a llamante y llamado y permite traer a éste como tercero, para que haga parte de un proceso, con el propósito de exigirle la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el llamante como producto de la sentencia. Se trata de una relación de carácter sustancial que vincula al tercero citado con la parte principal que lo cita y según la cual aquél debe responder por la obligación que surja en virtud de una eventual condena en contra del llamante. El objeto del llamamiento en garantía lo es “que el tercero llamado en garantía se convierta en parte del proceso, a fin de que haga valer dentro del mismo proceso su defensa acerca de las relaciones legales o contractuales que lo obligan a indemnizar o a rembolsar, y al igual del denunciado en el pleito, acude no solamente para auxiliar al denunciante, sino para defenderse de la obligación legal de saneamiento.” Tal como lo ha sostenido la jurisprudencia reiterada de esta Sección, el llamamiento en garantía, se regula por el Código de Procedimiento Civil (artículo 57 del C.P.C.).(Se destaca en negrillas y subrayas).

Para el efecto se acompaña el documento que acredita el vínculo entre la ANI y la llamada en garantía esto es, copia del contrato de concesión, suscrito entre el INCO y la Concesión Autovía Neiva Girardot SAS, así como el respectivo certificado de existencia y representación de dicho concesionario, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.

Pruebas

Se solicita el decreto y la incorporación de la copia del Contrato de Concesión No. 017 de 2015 y de sus Anexos Técnicos, y el Informe del Director de la Interventoría.

Notificaciones

El llamado en garantía, LA CONCESIÓN AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S. recibirá las notificaciones en la Autopista Norte, Kilometro 21, Interior Olímpica – Chía Cundinamarca o a los siguientes correos electrónicos: correspondencia@autovia.com.co; laura.ramirez@autovia.com.co

Y para los efectos de ley, la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI**, recibirá notificaciones en la Calle 26 Nro. 59-51 Edificio T4 Torre B Centro Empresarial Sarmiento Angulo, 6º Piso, Gerencia de Defensa Judicial, BX: 3791720. Bogotá, D.C.

Cordialmente,

Sócrates Fernando Castillo Caicedo
C.C. 1.030.537.502 de Bogotá
T.P. 214.995 del C.S. de la J.